

GLCMUT

GUÍA ACADÉMICA

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

Presidentes: Mateo Álvarez y Emiliano Santacruz

Supervisor: Nicolás Sarria



ÍNDICE

1. Carta de Bienvenida

2. Información General del Comité

3. Tema 1

Contexto Histórico

Situación Actual

Puntos Clave del Debate

Preguntas Orientadores

Referencias

4. Tema 2

Contexto Histórico

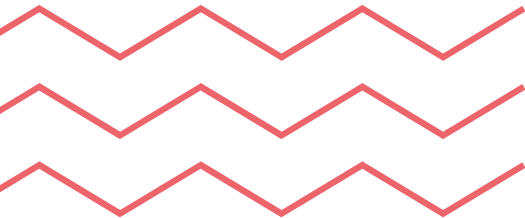
Situación Actual

Puntos Clave del Debate

Preguntas Orientadores

Referencias

5. Recomendaciones Finales



CARTA DE BIENVENIDA

Estimados delegados,

Bienvenidos al Modelo GLCMUN XI. Somos Mateo Álvarez Muriel y Emiliano Santacruz Castillo. Hoy tenemos el honor de ser los presidentes de la comisión ECOSOC y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros el camino hasta llegar aquí.

Yo, Mateo, tengo 16 años y curso grado 10 en el Colegio Alemán. Llevo 8 años en la Escuela Modelo ONU participando en 16 modelos. He descubierto que estar aquí no es solo una actividad extracurricular, sino un proceso de crecimiento personal. Esta experiencia ha transformado mis habilidades de redacción, expresión oral, investigación y negociación, convirtiéndolas en herramientas para construir puentes donde otros ven barreras. Yo, Emiliano, tengo 15 años y curso grado 10 en el Colegio Alemán. Cuento con 4 años de experiencia en la Escuela Modelo ONU y he participado en 16 modelos. Haber hecho parte de la escuela ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida, ya que me ha permitido fortalecer mis habilidades de redacción, expresión oral, investigación y mi capacidad de negociación en situaciones de conflicto y debate.

Esperamos que este modelo sea una experiencia inolvidable para ustedes, en la que disfruten, participen activamente y, sobre todo, aprendan, que es el verdadero objetivo de esta comisión. Este modelo no solo es una oportunidad para reforzar y demostrar sus conocimientos en áreas como las ciencias sociales, humanas y políticas, sino también para descubrir y fortalecer habilidades fundamentales para sus proyectos académicos y su futuro profesional.

Atentamente,

Mateo Álvarez

Mateo Álvarez | Presidente ECOSOC

Emiliano Santacruz

Emiliano Santacruz | Presidente ECOSOC

INFORMACIÓN GENERAL DEL COMITÉ

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) fue establecido en 1945 como uno de los seis órganos principales de la ONU y desde entonces ha sido el espacio institucional responsable de coordinar los esfuerzos internacionales orientados al desarrollo económico, social, cultural y ambiental, entendiendo estos ámbitos como componentes esenciales para garantizar una paz duradera.

HISTORIA

Su creación respondió a la necesidad de reconstruir el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y evitar que la desigualdad, la pobreza y la falta de cooperación internacional volvieran a convertirse en causas de conflicto global.

Desde sus primeros años, ECOSOC promovió iniciativas de cooperación internacional para el acceso universal a la educación, la salud, la asistencia humanitaria, los derechos sociales y económicos y el desarrollo científico y tecnológico, incorporando paulatinamente nuevas preocupaciones globales como la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la igualdad de género. En el siglo XXI asumió un liderazgo central a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) y luego mediante la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), lo que consolidó su papel como órgano catalizador de políticas públicas globales destinadas a reducir la pobreza extrema y garantizar condiciones de vida dignas para toda la población mundial.

MISIÓN Y VISIÓN

Su misión consiste en promover un desarrollo equilibrado entre naciones, y su visión propone un mundo basado en la cooperación multilateral y en la igualdad de oportunidades.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ECOSOC está integrado por 54 Estados miembros elegidos por períodos de tres años y actúa mediante comisiones funcionales, regionales y comités especializados, además de servir como plataforma para la participación de organizaciones no gubernamentales acreditadas, lo que lo convierte en una de las instancias más inclusivas del sistema internacional al permitir la convergencia entre gobiernos, sociedad civil y organismos multilaterales.

ÁREAS DE TRABAJO

1. Desarrollo sostenible: Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), supervisión del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, y coordinación de políticas para erradicar la pobreza y reducir desigualdades.

2. Desarrollo económico: promoción del crecimiento inclusivo, cooperación financiera y comercial internacional, y coordinación con instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

3. Desarrollo social: Igualdad de género (a través de comisiones como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer), protección de derechos humanos en el ámbito social, inclusión social y protección de grupos vulnerables.

4. Asuntos humanitarios: Coordinación de la respuesta ante crisis humanitarias, y trabajo conjunto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

5. Cooperación internacional: Articulación entre agencias especializadas de la ONU, y Relación con organizaciones no gubernamentales (ONG) mediante el estatus consultivo.

NORMATIVAS Y PRINCIPIOS

ECOSOC está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en el Capítulo X (Artículos 61 al 72).

Principios rectores:

1. Multilateralismo
2. Igualdad soberana de los Estados
3. Cada Estado miembro tiene representación y derecho a voto dentro del Consejo.
4. Integra las dimensiones económica, social y ambiental.
5. ECOSOC actúa como órgano central de coordinación del sistema ONU en temas económicos y sociales.
6. Es el único órgano principal de la ONU que otorga estatus consultivo formal a ONG.

REFERENCIAS

Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas -ECOSOC. (s.f.). En Cancillería de Colombia. <https://www.cancilleria.gov.co/internacional/politica/sociales/ECOSOC>

Hammar skjöld, N. U. B. D. (s.f.). Research Guides: Documentación de la ONU: Consejo Económico y Social: Introducción. <https://research.un.org/es/docs/ecosoc>

TEMA 1:

Políticas multiculturales para asegurar el derecho a la vivienda y frenar la gentrificación en Europa

CONTEXTO HISTÓRICO

El fenómeno de la gentrificación hace referencia, según Asale and Rae (s.f.), al “Proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra con mayor poder adquisitivo”. El término fue utilizado por primera vez por la socióloga Ruth Glass en la ciudad de Londres, en su libro *London: Aspects of Change* (1964).

Este periodo estuvo marcado por la Guerra Fría (la Crisis de los Misiles en Cuba y la escalada de la Guerra de Vietnam), la descolonización de varias naciones africanas y numerosos movimientos sociales y culturales en favor de los derechos civiles, como el liderado por Martin Luther King Jr. En esta década, la gentrificación era un concepto reciente que, como es de esperarse, no aparecía en titulares de prensa ni era reconocido a nivel global, por lo que ningún país contaba con políticas públicas para enfrentarla. Sin embargo, ya era un fenómeno presente en ciertas áreas residenciales de bajos recursos, especialmente en ciudades como Nueva York y Londres, e incluso en distintas zonas de Estados Unidos.

Se registraron casos en los que familias de clase media ocuparon viviendas accesibles en estos sectores, lo que atrajo inversores y empresas que impulsaron remodelaciones y nuevos proyectos urbanos. Esto incrementó los costos de vida (servicios básicos, comercio, transporte y vivienda), provocando que los habitantes originales tuvieran que desplazarse hacia sectores más asequibles. De esta manera, se generó un flujo migratorio interno producto del desplazamiento urbano.

Las personas afectadas por estos procesos solían ser obreros de fábricas, trabajadores textiles, albañiles, meseros, mecánicos o empleados domésticos; es decir, trabajadores con empleos mal remunerados. En Estados Unidos, el salario mínimo era de \$1,25 por hora (*History of Federal Minimum Wage Rates Under the Fair Labor Standards Act, 1938–2009, s.f.*). Asimismo, según datos históricos del Parlamento del Reino Unido, el salario de estos trabajadores representaba aproximadamente el 59 % del que se registraría en 1972, lo que equivale a £1062 anuales, es decir, alrededor de £35,72 semanales (*Wage Rates and Earnings – Hansard – UK Parliament, 1973*).

Estas cifras apenas permitían cubrir, con múltiples limitaciones, los gastos básicos de alimentación, transporte, alquiler y servicios públicos. Para sostenerse, estas familias debían comprar en tiendas locales de bajo costo, acceder a viviendas sencillas y mantener un margen mínimo, cuando no inexistente, para el ahorro o el entretenimiento.

Entre 1970 y 1980, el fenómeno ganó fuerza y comenzó a expandirse por Estados Unidos, Europa y América Latina. La llegada de los llamados “baby boomers”, muchos de ellos parejas sin hijos y con doble ingreso, impulsó la búsqueda de viviendas cercanas a sus lugares de trabajo, especialmente en zonas centrales de las ciudades. Este proceso condujo a la ocupación de barrios que habían sido descuidados por el Estado y que estaban habitados principalmente por comunidades de bajos ingresos.

Un caso representativo fue el de Le Marais, en París, en 1977. Este barrio, que llevaba varios años en decadencia, experimentó un proceso de aburguesamiento que coincidió con la inauguración del Centro Pompidou (Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou), el cual incorporó inicialmente el Museo Nacional de Arte Moderno. La apertura de este complejo cultural revitalizó la economía del sector al atraer un alto flujo turístico, así como a artistas vanguardistas, diseñadores reconocidos y boutiques interesadas en establecerse en la zona. Sin embargo, esta transformación representó un cambio drástico para los habitantes originales, ya que la reactivación comercial vino acompañada de un incremento significativo en los precios de la vivienda y de los locales comerciales, lo que los obligó a desplazarse hacia otros sectores y comenzar nuevamente.

Por otro lado, en ciudades como Nueva York surgieron movimientos como la “Operation Move-In”, una iniciativa organizada por comunidades en defensa del derecho a la vivienda y en contra de los desalojos de inquilinos de clase trabajadora y de bajos recursos derivados de planes de renovación urbana. En este contexto, los manifestantes ocuparon edificaciones vacías que estaban destinadas a la demolición, con el argumento de que podían ser rehabilitadas y utilizadas para brindar alojamiento a estas comunidades. Esta protesta del movimiento okupa fue pacífica y llegó a adquirir una dimensión considerable, logrando incluso vincularse con organizaciones políticas y comunitarias que compartían el mismo objetivo: frenar el desplazamiento urbano y promover el acceso a vivienda asequible. Si bien el movimiento no logró detener estructuralmente los procesos de renovación urbana ni se oponía de manera directa a la gentrificación como concepto, sí sentó un precedente importante al visibilizar el problema y sembrar la base para futuras movilizaciones sociales.

En la década de 1980, el fenómeno comenzó a adquirir mayor relevancia académica y política, lo que impulsó nuevas investigaciones sobre sus causas y consecuencias.

Algunos estudios señalan que, tras la aprobación de la Ley Hart-Celler en 1965, la cual flexibilizó las restricciones migratorias en Estados Unidos, los procesos de aburguesamiento se intensificaron en determinadas zonas urbanas (Hwang, 2015). La llegada de nuevos inmigrantes, especialmente de origen hispano y asiático, respondió a la búsqueda de mejores condiciones de vida y contribuyó a la repoblación de áreas que habían perdido habitantes debido a la desurbanización y la desindustrialización.

Aunque actualmente barrios como Williamsburg en Brooklyn o Wicker Park en Chicago son reconocidos como enclaves con una fuerte identidad cultural y étnica, en ese momento estaban lejos de consolidarse como tales. El crecimiento de estas comunidades transformó progresivamente la composición racial y étnica de los sectores donde se asentaron, modificando la dinámica social, económica y cultural de los barrios urbanos en proceso de cambio.

A esto se suma que ciertos gentrificadores, al declararse atraídos por la diversidad cultural y la integración racial, orientaron deliberadamente su preferencia residencial hacia estos sectores. Muchos de estos barrios se caracterizaban por bajos costos de alquiler, tanto residenciales como comerciales, y altas tasas de desocupación, lo que ofrecía a jóvenes emprendedores acceso a vivienda y oportunidades de negocio relativamente asequibles. Además, la lógica económica resultaba atractiva: adquirir propiedades a bajo precio para posteriormente venderlas o arrendarlas a valores más elevados generaba amplios márgenes de ganancia.

El atractivo de la “novedad” también impulsaba el consumo. Nuevos clientes acudían a estos sectores motivados por propuestas innovadoras, lo que permitía la apertura de diversos tipos de establecimientos, desde cafés y restaurantes hasta espacios de entretenimiento como arcades o centros recreativos. Este dinamismo comercial incrementaba el flujo constante de consumidores y fortalecía la actividad económica local.

A largo plazo, el riesgo empresarial tendía a disminuir debido a la creciente atención estatal. Una vez que estas zonas comenzaban a revitalizarse, las administraciones públicas solían intervenir mediante inversiones en infraestructura, servicios y seguridad, con el objetivo de consolidar la renovación urbana y evitar un nuevo deterioro. En este contexto, los emprendedores eran frecuentemente percibidos como agentes de desarrollo y modernización, capaces de atraer inversionistas y socios estratégicos interesados en participar en el crecimiento del sector. En algunos casos —aunque no de manera generalizada— incluso recibieron apoyo gubernamental para impulsar sus proyectos, fortaleciendo así la inversión privada en estos espacios (Zuk et al., 2018).

Sin embargo, durante esos quince años no solo evolucionó la manera en que el Estado gestionaba, y en algunos casos aprovechaba, estos procesos de renovación urbana, sino que la sociedad comenzó a reconocer la gentrificación como un problema estructural. En distintos países europeos surgieron movimientos squatter, cuyos integrantes ocuparon edificios vacíos para resistir planes de demolición, especulación inmobiliaria y desplazamiento forzado. Estas movilizaciones incluyeron la construcción de redes de resistencia, barricadas y enfrentamientos con la policía, con el objetivo de frenar reestructuraciones urbanas que afectaban directamente a los barrios populares (Van Der Steen, 2024).

En la década de 1980, los procesos se intensificaron. Inversionistas inmobiliarios renovaron edificios, incrementaron los alquileres y provocaron el desplazamiento masivo de residentes de bajos ingresos. En Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan impulsó políticas económicas de corte neoliberal que priorizaban el libre mercado y reducían la intervención estatal, lo que implicó recortes significativos en vivienda pública y programas sociales. Paralelamente, la pobreza comenzó a abordarse desde una perspectiva securitista: en lugar de tratarla como un problema social y económico, se la presentó como una amenaza al orden urbano. Las personas sin hogar fueron retratadas como “obstáculos” para la renovación y modernización de la ciudad. Un ejemplo de esta lógica se evidenció en 1988, cuando se implementó una ordenanza municipal que imponía un toque de queda nocturno en un parque utilizado como espacio de vivienda y encuentro comunitario. Aunque la medida fue justificada como una estrategia para mejorar la seguridad, muchos la interpretaron como un mecanismo para expulsar a las personas sin hogar y “limpiar” el área con el fin de hacerla más atractiva para inversionistas y compradores con mayor poder adquisitivo.

Las protestas que siguieron contaron con la participación de artistas, jóvenes vinculados al movimiento punk, activistas por el derecho a la vivienda, personas que habitaban el parque y antiguos residentes de barrios como East Village. Los enfrentamientos con la policía evidenciaron la creciente tensión entre el Estado y las comunidades afectadas, así como la falta de garantías efectivas en el cumplimiento del derecho a la vivienda.

Ocho años después, en el Tompkins Square Park Riot, también ubicado en el barrio de East Village, Nueva York, tuvo lugar uno de los episodios de resistencia urbana contra la gentrificación más emblemáticos. Este enfrentamiento entre residentes y fuerzas policiales fue el resultado de años de tensiones acumuladas por los cambios socioeconómicos en el sector. East Village había sido históricamente un barrio de clase trabajadora, con alquileres bajos y una población compuesta en gran medida por personas sin hogar, estudiantes e inmigrantes que llevaban una vida modesta, aunque marcada por la precariedad.

El disturbio estalló tras la imposición de un toque de queda en el parque, medida que fue percibida como un intento de desplazar a las personas que utilizaban el espacio como lugar de vivienda y encuentro comunitario. La respuesta policial fue contundente y generó enfrentamientos violentos, evidenciando las profundas tensiones entre las políticas de "orden urbano" y el derecho a la vivienda. El suceso se convirtió en un símbolo del conflicto entre procesos de renovación urbana y las comunidades vulnerables que habitaban estos espacios.

Tras la recesión económica de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, el cambio de siglo vino acompañado de una reactivación de los procesos de inversión y renovación urbana, esta vez con mayor intensidad y alcance global. En ciudades estadounidenses como Nueva York, particularmente en el antiguo barrio industrial de Williamsburg, comunidades puertorriqueñas y polacas enfrentaron desplazamientos progresivos debido a la llegada constante de inversionistas, emprendedores y nuevos desarrollos inmobiliarios.

En América Latina también se observaron dinámicas similares. En el centro histórico de Ciudad de México, la política urbana conocida como "Bando 2", implementada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal, buscaba frenar la expansión desordenada de la ciudad y promover la densificación en zonas centrales, restringiendo la construcción en la periferia. Aunque la medida tenía como objetivo beneficiar a poblaciones de bajos recursos al facilitar el acceso a vivienda en áreas con mejor infraestructura, generó efectos no previstos. La concentración de inversión atrajo a inmobiliarias y empresas que aprovecharon la valorización del suelo, lo que incrementó significativamente los precios de la vivienda y aceleró procesos de aburguesamiento en barrios como la Condesa, Roma, el Centro Histórico, Juárez y San Rafael.

Las estadísticas posteriores evidenciaron un aumento sustancial en los valores del suelo y de los alquileres en estas zonas, confirmando que políticas diseñadas con un enfoque social pueden, en determinados contextos de mercado, producir efectos que terminan favoreciendo dinámicas de exclusión urbana.

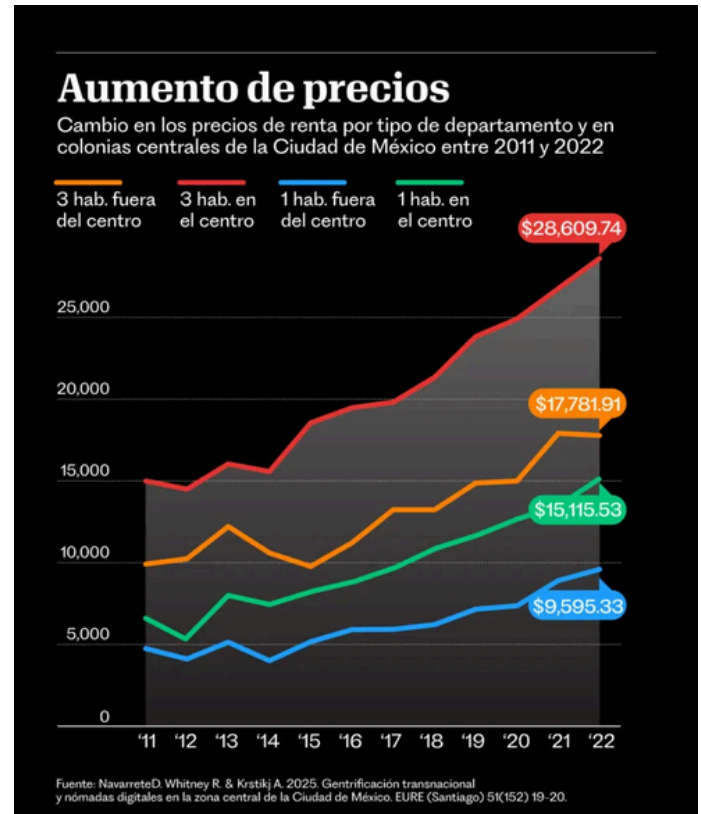
A partir de 2010, este fenómeno se ha consolidado como punto de análisis y debate por organizaciones como la ONU, asociaciones y centros académicos de investigación, ONGs de vivienda como Housing Associations, gobiernos locales y nacionales e incluso algunas veces causantes modernos del problema como Airbnb se han sumado a discusiones para regular y encontrar alternativas a sus modelos de turismo alrededor de todo el globo.

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, el aburguesamiento es manifestado por medio del incremento constante de los gastos de renta y vivienda, el cambio del comercio regional y la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo que causan la sustitución progresiva de comunidades históricas por poblaciones con ganancias más elevadas, alterando así la identidad de la sociedad y de la cultura del lugar. Hay que tener en mente que el proceso de gentrificación solamente ocurre cuando hay un desplazamiento de una comunidad, no solamente cuando los costos de un área suben por inversiones del Estado. Esto sería un caso de segregación de recursos al no tener en cuenta a los menos pudientes que no podrían consumir productos ni servicios de mejor calidad, privando el consumo de los productos. Esta aclaración es importante, ya que hay investigaciones que tachan casos de segregación por gentrificación, brindando datos erróneos.

Según Azteca Noticias, 2025, el auge de este fenómeno en América fue en el año de 2015, donde la revalorización de áreas céntricas por su ubicación valga la redundancia central fue uno de los principales causantes. Sin embargo, en este mismo año empezaron a desarrollarse las hoy (aún más) famosas empresas de turismo multi e internacionales como Airbnb o Booking.com, las cuales están presentes en incontables países y regiones en todo el mundo, donde anfitriones publican y ofrecen sus propiedades a viajeros interesados en conseguir alojamiento a través de comisiones por reserva y transacciones digitales. Este sistema exitoso ha potencializado este fenómeno desde cuatro puntos principales:

- 1. Disminución de la disponibilidad de vivienda para locales:** La transformación de alquileres residenciales a alojamiento con fines de turismo reduce la cantidad de hogares accesibles para la población local y para las familias del mismo país



TecScience

Ilustración 1: Cambio en los precios de renta por tipo de departamento y en colonias centrales de la Ciudad de México entre 2011 y 2022. (TecScience, 2025.)

2. **Incremento en los costos:** La impactante y creciente demanda turística y la salida de propiedades del mercado habitual provocan, un encarecimiento del alquiler y compra de bienes y recursos, volviendo la zona impagable para las sociedades con bajos ingresos.
3. **Investimento y especulación inmobiliaria:** Este punto es de gran importancia, ya que, al crear un mayor y habitual flujo de turistas en sectores específicos, se genera la inversión en terrenos no formalizados ni regularizados, que tampoco tienen acceso a servicios básicos como agua o luz. Esto se hace con el fin de acondicionarlo, no para crear viviendas para los locales, sino para luego arrendarlo, ganar dinero y agravar el problema, quitando así espacio indispensable para la construcción de moradas.

4. **Transformación de la identidad social, cultural y comercial:** Los comercios de proximidad y los servicios tradicionales fueron reemplazados por negocios enfocados a la industria del turismo, como cadenas comerciales y establecimientos con costes más altos cambiando la identidad del barrio y favoreciendo la movilización de los vecinos.

En Ciudad de México, donde no ha mejorado la situación, el precio de renta se ha duplicado en comparación del año 2011 con 2022 (Ilustración 1) a empresa de Airbnb ha justificado que con el uso de la plataforma se están generando miles e incluso millones de empleos, registrándose en el año 2023 sólo en la

zona del centro de ciudad de México 5033 viviendas en renta por medio de esta app (Ilustración 2)(Jaber, 2025), empleos que si no existieran se incrementaría la tasa de desempleo en las ciudades con más acogida de turistas por este medio. Por otro lado, hay ciudades en las que la cantidad de hospedajes es inmensa, como en el caso de Londres en Reino Unido, París en Francia o Estambul en Turquía, capitales con economías lo suficientemente sólidas como para que su turismo no se desplome por el cierre de la aplicación, sin embargo, no todas las ciudades tienen una economía así de estable, por lo que numerosos ámbitos de la economía podrían verse afectados tanto positiva como negativamente por esta deficiencia, siendo estos:

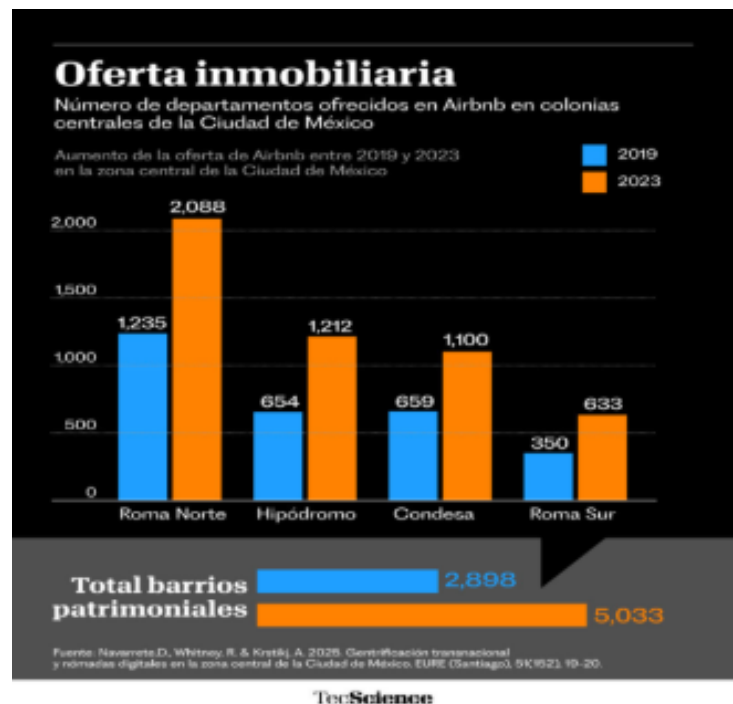


Ilustración 2: Comparación oferta de Airbnb en Ciudad de México años 2019 y 2023 (TecScience, 2025).

1. **Turismo:** Evidentemente, se vería afectado por el claro decremento de la oferta de alojamiento alternativo a los hoteles, los cuales se verían sobrepoblados y el Estado debería invertir más recursos monetarios en construir estos edificios hoteleros, impactando la economía al cambiar el turismo por algo más formal y no tan flexible.
2. **Mercado inmobiliario:** Disminuiría la rentabilidad de los arriendos a corto plazo, por lo que numerosas viviendas volverían al alquiler a largo plazo, lo que permitiría que en las zonas gentrificadas tuviera lugar una estabilización o incluso una reducción de precios de renta y servicios en general.
3. **Comercio local:** Un gran número de negocios con enfoque a turistas, como cafés, bares y algunas tiendas experimentarían una menor cantidad de clientes, sin embargo, los negocios tradicionales que fueron cerrados o que perdieron clientela por el fenómeno del aburguesamiento volverían a abrir y atraería otro tipo de clientela, haciendo que la economía local no caiga y se diera un reajuste en el consumo en dichas colonias.
4. **Empleo:** Ocupaciones relacionadas a la limpieza, mantenimiento, servicios turísticos informales y administración de propiedades se verían afectados al perder sus trabajos y tener que buscar alternativas para los mismos, generando por consecuencia una movilización a otras zonas turísticas o donde se requieran dichos servicios.
5. **Ingresos fiscales:** se daría una menor recaudación de impuestos que estén ligados a alquileres y turismo, a pesar de ello podría darse una especie de compensación a largo plazo por el aumento en los impuestos recaudados de la vivienda formal y del consumo local
6. **Plataformas digitales y la economía colaborativa:** Por último, los ingresos para estas plataformas se verían casi en su totalidad terminados, lo que generaría controversia y debates sobre la regulación de la economía digital en todo el mundo.

En países como España, la gentrificación es un problema de carácter crítico que añade un nuevo factor en la ecuación, la falta de vivienda. Desde el año 2010, España ha enfrentado una grave carencia de vivienda y encarecimiento de los alquileres muy relacionado a la gentrificación y al incremento del turismo a nivel abismal. En barrios como El Raval, Barceloneta Gràcia, en el Centro de Madrid, Malasaña y Lavapiés este fenómeno ha dejado muchísimas personas durmiendo en las calles y en riesgo de exclusión habitacional, creando una mayor dificultad para jóvenes y familias de bajos ingresos, provocando desplazamientos hacia las periferias de las ciudades, por la subida en gasto por vivienda. La capital española ha creado programas de vivienda pública que incluyen construcciones de viviendas a un precio favorable y fomentan la colaboración público-privada con el objetivo de ampliar la oferta de edificios disponibles para la habitación. De igual manera, ha intentado implementar una regulación gradual como la Ley de Vivienda de 2023 que ponía límites al aumento de los alquileres y ayudaba zonas tensionadas, ofreciendo ayuda con las rentas para familias vulneradas y jóvenes.

Barcelona por su lado ha adoptado otras estrategias con el fin de llegar al mismo objetivo. La ciudad catalana puso restricciones muy estrictas a agencias de viaje como Airbnb, también ha comprado edificios para que sean designados a la vivienda social y darle así ayuda inmediata a personas en riesgo de ser desalojadas, por último brinda protección a los arrendatarios históricos y ayuda legal a los más afectados.

La gentrificación puede entenderse como un “mejoramiento” urbano que, lejos de ser neutral, reordena el poder en el espacio: la renovación física y la inversión privada elevan rentas y costos de vida y terminan sustituyendo a la población original por residentes con mayor capacidad de pago. El discurso público suele legitimar este proceso bajo categorías aparentemente universales como “progreso”, “seguridad” o “revitalización”, pero esas nociones reflejan estándares asociados a grupos con mayor capital económico y cultural, convertidos en norma. Así, el desplazamiento no es un accidente sino un resultado estructural de un modelo donde la permanencia en la ciudad se condiciona a la productividad y al consumo, priorizando a quienes encajan en las métricas dominantes de “valor” y relegando a quienes no pueden sostener el aumento sostenido del costo de vida.

Desde 2010, la gentrificación se ha consolidado como un problema global. En la actualidad se manifiesta mediante el encarecimiento de la vivienda, la transformación del comercio local y la sustitución de comunidades históricas. Plataformas de alquiler turístico como Airbnb han intensificado este proceso al reducir la oferta de vivienda residencial y fomentar la especulación. Ciudades como Madrid y Barcelona han respondido con regulaciones, vivienda pública y restricciones al turismo, evidenciando que la gentrificación es hoy un desafío central para el derecho a la vivienda y el desarrollo urbano sostenible.

PUNTOS CLAVE DEL DEBATE

- La gentrificación no es solo renovación urbana, ocurre cuando una comunidad es desplazada. Sin desplazamiento, no hay gentrificación, sino segregación.
- El fenómeno tiene raíces históricas profundas y no es nuevo. Desde los años 60, las ciudades crecen sin políticas que protejan a las poblaciones más vulnerables.
- Las fronteras económicas dentro de las ciudades funcionan como fronteras reales. Cuando sube la renta, la gente no se va porque quiere, se va porque no puede quedarse.
- El mercado inmobiliario ha priorizado la ganancia sobre el derecho a la vivienda. Esto convierte los hogares en activos financieros y a las personas en variables prescindibles.
- Las plataformas digitales como Airbnb han acelerado el problema. Reducen la vivienda disponible para locales y elevan precios en barrios históricamente accesibles.
- La especulación inmobiliaria agrava la desigualdad urbana. Comprar barato, renovar y vender caro beneficia a pocos y expulsa a muchos.
- La transformación del comercio local cambia la identidad del barrio. Tiendas de proximidad desaparecen y son reemplazadas por negocios dirigidos al turismo o a altos ingresos.
- Los movimientos sociales han sido una respuesta directa al desplazamiento. Protestas como las de Nueva York o Europa muestran que la vivienda es un derecho, no un lujo.
- La falta de regulación estatal permite que el problema se repita. Cuando el Estado llega tarde, el daño social ya está hecho.
- Regular no significa eliminar el turismo o la inversión. Significa equilibrarlos con el derecho de las personas a permanecer en su comunidad.
- Las políticas públicas mal diseñadas pueden empeorar la situación. Incluso medidas con intención social pueden atraer especulación si no se acompañan de controles.
- La vivienda pública y la protección a inquilinos son herramientas clave. Sin un parque habitacional accesible, cualquier regulación es insuficiente.
- La gentrificación expulsa especialmente a jóvenes, migrantes y trabajadores informales. Son quienes menos capacidad tienen para absorber aumentos de renta.
- El desplazamiento urbano genera migración interna forzada. Las personas se alejan de su trabajo, su escuela y su red social.
- La ciudad no solo es infraestructura, es comunidad. Perder un barrio es perder identidad, historia y tejido social.
- El debate no es desarrollo vs. comunidad. El verdadero debate es cómo desarrollar sin desplazar.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Ha experimentado su delegación procesos de gentrificación en ciudades o regiones específicas? En caso de que sí, ¿cuáles fueron las principales causas?
2. ¿Qué políticas públicas o marcos regulatorios ha implementado su delegación para gestionar la inversión urbana y así evitar el desplazamiento de comunidades originarias de estas zonas?
3. Si su delegación ha implementado estrategias de renovación urbana, ¿Qué beneficios le ha traído estas a su nación? ¿Ha habido puntos negativos con las mismas?
4. ¿Destina su delegación recursos monetarios para implementar programas de protección a habitantes, desarrollo urbano inclusivo o vivienda asequible para y en las zonas aburguesadas?
5. ¿En qué medida se justifica el desplazamiento de comunidades históricas con el crecimiento económico de un país?
6. ¿De qué manera puede contribuir su país a desarrollar un modelo urbano más sostenible, justo e inclusivo para minimizar o erradicar los efectos de este fenómeno?
7. ¿Cuál es el papel del Estado en cuanto al impacto de plataformas turísticas de carácter digital en el aumento en los costos de la vivienda?
8. ¿Cómo puede cooperar su delegación con otros gobiernos para combatir este fenómeno?

REFERENCIAS

Aguilar, X. (s.f.). What influence does Airbnb have on housing in Barcelona? *UOC*. <https://www.uoc.edu/en/news/2024/the-influence-of-airbnb-on-the-supply-of-homes-for-rent-in-barcelona>

Communications. (4 agosto, 2025). Gentrificación: causas, consecuencias y cómo afecta a barrios de todo el mundo. BBVA NOTICIAS. <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/causas-y-consecuencias-de-la-gentrificacion-cuando-la-merceria-se-convierte-en-otra-cafeteria-de-diseno/>

Congostrina, A. L., Congostrina, A. L., & Congostrina, A. L. (21 noviembre, 2024). El alcalde de Barcelona responde a Airbnb: “La decisión de acabar con todos los pisos turísticos es firme.” *El País*. <https://elpais.com/espana/catalunya/2024-11-21/el-alcalde-de-barcelona-responde-a-airbnb-la-decision-de-acabar-con-todos-los-pisos-turisticos-es-firme.html>

Domaradzka, A. (2018). Urban Social Movements and the Right to the City: An Introduction to the Special Issue on Urban Mobilization. *VOLUNTAS International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 29(4), 607–620. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-0030-y>

GAIA REDAELLI. (2020). ATLAS DE LA A-GENTRIFICACIÓN. POLÍTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL EN LAS TRANSFORMACIONES URBANAS EN CIUDADES EUROPEAS. In *Papers* (Vol. 60, pp. 170–172). <https://www.institutmetropoli.cat/wp-content/uploads/2018/06/60-15.pdf>

History of federal minimum wage rates under the Fair Labor Standards Act, 1938 - 2009. (s.f.). DOL. <https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/history/chart>

Hwang, J. (2015). Pioneers of Gentrification: Transformation in global neighborhoods in urban America in the late twentieth century. *Demography*, 53(1), 189–213. <https://doi.org/10.1007/s13524-015-0448-4>

Indicador de la Gentrificación en Madrid - MateWiki. (s.f.). https://mat.caminos.upm.es/wiki/Indicador_de_la_Gentrificaci%C3%B3n_en_Madrid

Jaber, I. G. (18 septiembre, 2025). Gentrificación transnacional: el impacto de la llegada de nómadas digitales a la CDMX. *TecScience*. <https://tecscience.tec.mx/es/ciudades-y-comunidades-prosperas/gentrificacion-transnacional/>

Las políticas públicas frente a la gentrificación. El caso de París intramuros. (2015). [Journal-article]. *Estudios Del ISHiR*, 37–52. <https://shs.hal.science/halshs-01198376v1/document>

Sánchez, Luis Fernando Campos, Jesús A.. Treviño C. (2021). GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO METROPOLITANO DE MONTERREY, 2010-2020[1]. <https://www.redalyc.org/journal/198/19869962008/movil/>

Ser, R. (19 junio, 2025). Cadena SER. Cadena SER. <https://cadenaser.com/nacional/2025/06/19/la-ministra-de-vivienda-aboga-por-la-limitacion-del-alquiler-y-lanza-un-dardo-a-madrid-es-la-ley-de-la-selva-cadena-ser/>

Torrens, J. D. J. (2024). Acceso a la vivienda, gentrificación e imposición de restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de residentes no españoles: Su posible justificación por razones legítimas de interés público y la compatibilidad con el derecho de la Unión. *Revista De Derecho Comunitario Europeo*, 78, 103–138. <https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.78.04>

Torres, B. (3 agosto, 2025). ¿Qué es la gentrificación y a quiénes afecta? - UNAM Global. UNAM Global - De La Comunidad Para La Comunidad. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/que-es-la-gentrificacion-y-a-quienes-afecta/

Van Der Steen, B. (2024). Travelling Barricades: Transnational networks, diffusion and the dynamics of 1980s squatter conflicts in Western Europe. *Contemporary European History*, 33(2), 599–614. <https://doi.org/10.1017/s0960777323000620>

Villa, L. P., Villa, L. P., & Villa, L. P. (24 marzo, 2025). Consumo identifica más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid. El País. <https://elpais.com/economia/2025-03-24/consumo-identifica-mas-de-15200-pisos-turisticos-ilegales-en-madrid.html>

Wirtz, W. W., Ross, A. M., UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR, BUREAU OF LABOR STATISTICS, Samuels, N. J., Mobley, T. C., & Laciskey, J. F. (1966). Union Wages and Hours: Building Trades, July 1, 1965 and Trend 1907-65, Bulletin No. 1487 (pp. 1–20) [Report]. Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402. https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/bls/bls_1487_1966.pdf

Wage rates and earnings - Hansard - UK Parliament. (12 diciembre, 1973). <https://hansard.parliament.uk/Commons/1973-12-12/debates/5fae6399-cdf3-4301-ab4b-bef890328125/WageRatesAndEarnings>

TEMA 2:

Reconstrucción tras violencia y crisis en África: disputa por la financiación y el control

CONTEXTO HISTÓRICO

La violencia en África es un problema que tiene una existencia de más de 150 años, se podría decir que el punto de partida fue: la conferencia de Berlín organizada por Otto von Bismarck en el año 1885, en esta reunión las naciones europeas como: Alemania, Bélgica, España, Francia, Imperio Otomano, Italia, Reino Unido, Portugal, Imperio Astrohúngaro, Países Bajos, Dinamarca, Estados Unidos, Rusia, y Reinos Unidos de Suecia y Noruega.

Decidieron repartirse el continente africano como si fuera un pastel, se reglamentó el reparto colonial de África entre esas potencias europeas, trazando fronteras sin consulta a líderes africanos. Estas fronteras artificiales se dibujaron "donde ningún pie blanco había pisado nunca: regalando montañas y ríos y lagos sin saber dónde estaban, por eso a día de hoy cuando se mira el mapa del continente las fronteras son líneas rectas hechas por lápiz y regla, no por montañas o ríos. Toda esta mala acomodación por parte de los Estados europeos sin la opinión de los líderes africanos trajo como resultado: Colonialismo, esclavitud, trabajos forzados y el problema más grande de todos fue que muchas poblaciones enemigas terminaron viviendo juntas, lo que llevo a la creación de muchas guerras civiles para ver quien debería tomar el poder.

Unas décadas después en los años 1950-1970 cuando muchos de los Estados africanos lograron su descolonización al mismo tiempo que trajo libertad, también trajo otros nuevos problemas. Las mismas fronteras de la colonia se quedaron, englobando a veces tribus o grupos étnicos rivales en un mismo país. Este ascenso de los países africanos produjo muchas disputas sobre la estructuración tanto del gobierno como del país.



Ilustración 1: Representación de la conferencia de Berlín haciendo analogía de África como un pastel (Portal Académico CCH, s.f.).

Debido a las huellas de la colonia, habían quedado las “elites” las cuales se enfrentaban a disputas históricas y estructuras administrativas débiles la práctica colonial de “divide y vencerás” había agudizado las tensiones internas. Todo esto trajo como resultado, infinidad de guerras internas por parte de grupos insurgentes vs monarquías para ver quién debería tener el poder. Al haber tanta flaqueza al gobernar todos creían poder hacerlo y esto combinado con la falta de un proyecto nacional compartido y de instituciones sólidas alimentó ciclos de conflictos poscoloniales y permitió que antiguas rivalidades aumentarían violentamente en países como Nigeria, Ruanda, Angola o la propia República Democrática del Congo.

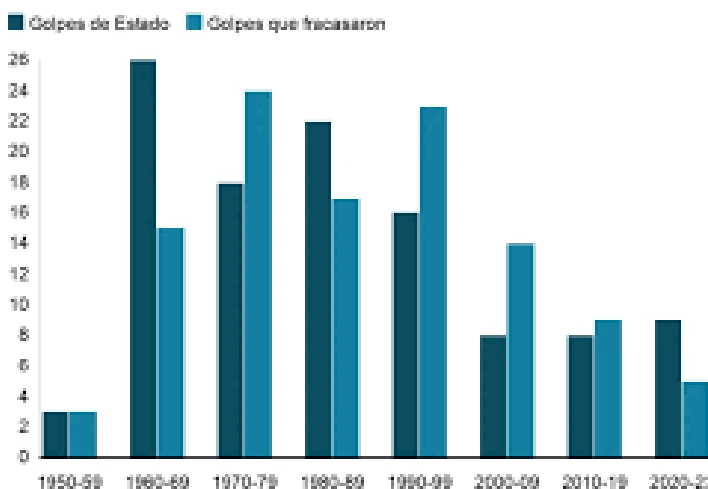
Durante la Guerra Fría (aproximadamente 1947–1991), África tuvo que ser utilizada como un escenario de rivalidad entre potencias externas. Estados Unidos y la Unión Soviética —y sus aliados regionales— apoyaron regímenes o rebeliones según sus intereses ideológicos. Por ejemplo, la URSS y Cuba respaldaron movimientos marxistas en Angola y Etiopía, mientras EE. UU. y sus aliados apoyaron bandas anticomunistas (p. ej. Sudáfrica contra el MPLA en Angola). Este intervencionismo prolongó y agudizó conflictos locales, socavó la construcción de paz y dejó legados de armamento e inestabilidad que perduraron tras la caída del Muro de Berlín. En general, el apoyo de potencias externas a «bandos amigos» exacerbó tensiones locales, transformando disputas internas en guerras con financiamiento y equipamiento internacional.

Ya en el siglo 21 la violencia no ha hecho nada más que subir, por ejemplo en Sudán y Sudán del Sur han sido dos de los más afectados con principales focos de inestabilidad en África, con raíces profundas en la histórica división Norte–Sur heredada del periodo colonial. La independencia en el año 2011 por parte del Sudán del Sur se podría considerar “inane” ya que ésta trajo consigo nuevos ciclos de violencia y no hubo una consolidación total de la paz entre ambos Estados. Sudán también ha sido uno de los países más necesitados con ayuda humanitaria que no le ha podido llegar, situaciones como la revolución sudanesa del año 2018 son simples muestras de la división de poder, y la opresión frente al pensamiento crítico que no se les deja a las personas desarrollar en estos países, lo que sucedió con esta tragedia fueron: protestas masivas contra la crisis económica y el régimen de Omar al-Bashir, quien fue derrocado el 11 de abril de 2019 tras un golpe militar respaldado por manifestantes. El proceso dejó al menos 246 muertos (según la Asociación de Profesionales Sudaneses y ONGs), incluyendo la masacre de Jartum del 3 de junio de 2019 (más de 100 fallecidos), y culminó en un acuerdo de transición que estableció un gobierno civil-militar con Abdalla Hamdok como primer ministro. En Sudán del Sur, la guerra civil iniciada en 2013 iniciado por un Golpe de Estado entre facciones políticas y étnicas terminó de hundir a un país el cual no tenía la capacidad institucional para ser un Estado, con un aproximado de 400.000 muertes y incertidumbre de lo que le depararía a un país que parecía no tener rumbo político.

Los intentos de reconstrucción en ambos países han mostrado que los acuerdos políticos sin inclusión real, desarme efectivo ni control civil de las fuerzas armadas generan procesos frágiles. Experiencias como el Acuerdo de Paz Integral de 2005 y el acuerdo revitalizado de 2018 en Sudán del Sur demuestran que la reconstrucción sostenible requiere combinar financiamiento internacional con reformas de gobernanza y reconciliación nacional.

Golpes de Estado en África

Número de golpes por década



Fuente: Investigación de la Universidad de Florida Central y la Universidad de Kentucky

Ilustración 2: Golpes de Estado en África (1950 - 2023) (BBC, 2023).

La República Democrática del Congo representa uno de los ejemplos más prolongados de conflicto estructural en África. En este país la violencia es cuestión

diaria y rutinaria, las fronteras coloniales artificiales, tensiones étnicas regionales y la explotación ilícita de recursos minerales, ha dado como resultado un proceso de infinidad de muertes, falta de derechos humanos y pobreza extrema.

Muchas organizaciones internacionales han intentado buscar acuerdos de paz y las Naciones Unidas también buscaron ayudar mediante sus misiones, pero, la ausencia de control estatal efectivo y la militarización de la economía han obstaculizado la reconstrucción. Las experiencias parciales dejan más dudas que respuestas, muestra que no hay reformas profundas o que se busque verdaderamente un cambio, hay una combinación de muchas cuestiones como: falta de justicia transicional fortalecimiento institucional local y falta de control de la financiación internacional, ya que gran parte esta se absorbe para patrocinar la guerra y situaciones bélicas.

En la región del Sahel (Mali, Burkina Faso, Níger) desde el año 2000 se vive una creciente espiral de violencia y crisis humanitaria. Las causas son muy parecidas a las de los otros países, gobiernos débiles incapaces de gobernar, exclusión social de poblaciones rurales, expansión de grupos yihadistas y efectos del cambio climático (sequías y desertificación). Grupos islamistas armados como JNIM (afiliado a Al-Qaeda) y Estado Islámico (ISSP) controlan áreas en el norte de Mali y Burkina Faso, imponiendo 'sharia', bloqueando ayuda humanitaria, asaltando aldeas y provocando hambruna local. Al igual que en el resto de países han surgido grupos al margen de la ley, los cuales trajeron violencia sectaria y venganzas.

Los actores principales son los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger (ahora con juntas militares tras golpes recientes), las fuerzas armadas implicadas en abusos y milicias progubernamentales como las VDP de Burkina, así como fuerzas internacionales (MINUSMA de la ONU en Malí, fuerzas francesas y africanas hasta 2022).

Por otra parte en Somalia se vive una crisis prolongada desde la caída de Siad Barre en 1991 que los dejó sin un gobierno central efectivo. Los mismos patrones se cumplen, grupos al margen de la ley que usan la religión para atacar a las fuerzas gubernamentales apoyadas por la Unión Africana y aliados internacionales. Al Shabaab (afiliado a Al-Qaeda desde 2012) realiza atentados frecuentes para derrocar al gobierno y establecer un Estado ultraconservador. Varios informes de la ONU (2016–2017) documentó que en ese periodo ocurrieron 2.078 muertes civiles y 2.507 heridos, de los cuales el 60% se atribuyen a Al Shabaab (solo el 4% a la Misión de la Unión Africana). Estos atentados fueron realizados con armas improvisadas, bombas suicidas y asedios, los cuales han dejado huellas en la infraestructura del país, escuelas, hospitales y puentes son los que reciben el daño y es una sociedad que se pierde por culpa de algo de lo cual no tienen control. No es únicamente violencia; también se acompaña de hambruna y sequías, y el gobierno, debido a la difícil situación y a tener las prioridades en financiar la guerra, no cuenta con el presupuesto suficiente para asegurar que los niños tengan libros en las manos y no armas. Los actores son el gobierno federal somalí, clanes locales, militantes de Al Shabaab y fuerzas de la misión AMISOM (acabada de sustituir por una nueva misión de transición). Aunque la UE y la ONU apoyan la reconstrucción institucional, el país aún carece de redes estatales sólidas, y el país necesita unas redes las cuales le aseguren a sus habitantes, la paz y una reconstrucción que asegure la protección de civiles y la reducción de la dependencia militar externa, con un enfoque en reconciliación entre clanes.

La RCA ha sufrido ciclos de violencia sectaria desde el año 2013. Esto empezó con el intento exitoso por la coalición rebelde mayoritariamente musulmana Seleka; enseguida surgieron milicias "anti-Balaka" los cuales atacaron a comunidades musulmanas. Un análisis humanitario de diciembre 2013 documentó que en solo dos semanas 210.000 personas huían de Bangui por la lucha entre excombatientes de Seleka y anti-Balaka. En el año siguiente alrededor de 710.000 civiles fueron desplazados por culpa del conflicto y 75.000 fueron a buscar asilo en países vecinos. La población sufrió masacres indiscriminadas por culpa de las milicias armadas de origen comunitario (Seleka, anti-Balaka) y fuerzas regionales (FOMAC, tropas francesas y de la ONU), saqueos, destrucción de viviendas, muertes, secuestros, e infinitas violaciones a los derechos humanos, lo cual dejó la capacidad institucional nacional casi a cero, y se generó una de las mayores crisis de desplazados en el mundo. Se necesita que se busque por la reconciliación nacional y la reconstrucción de servicios básicos y evitar la reaparición de la violencia étnico-confesional.

En el año siguiente alrededor de 710.000 civiles fueron desplazados por culpa del conflicto y 75.000 fueron a buscar asilo en países vecinos. La población sufrió masacres indiscriminadas por culpa de las milicias armadas de origen comunitario (Seleka, anti-Balaka) y fuerzas regionales (FOMAC, tropas francesas y de la ONU), saqueos, destrucción de viviendas, muertes, secuestros, e infinitas violaciones a los derechos humanos, lo cual dejó la capacidad institucional nacional casi a cero, y se generó una de las mayores crisis de desplazados en el mundo. Se necesita que se busque por la reconciliación nacional y la reconstrucción de servicios básicos y evitar la reaparición de la violencia étnico-confesional.

En Mozambique la insurgencia islamista en la provincia de Cabo Delgado (iniciada en 2017) ha evolucionado hacia una guerra regional. Grupos afiliados a ISIS, conocidos localmente como al-Shabab (sin vínculo con la milicia somalí), atacan aldeas del norte y secuestran personas para cumplir su visión estatal. Esta situación llegó a escalar a una guerra regional, fueron aldeas la que se devastaron, niños siendo usados como soldados, abusos sexuales a niñas e infinidad de violaciones de derechos humanos, causando más de 6.200 muertos civiles y el desplazamiento de hasta 1,3 millones de personas a lo largo del conflicto. El gobierno mozambiqueño, apoyado desde 2021 por tropas ruandesas y de la misión regional SADC (que se retiró parcialmente en años posteriores), logró recuperar territorios clave, aunque la violencia persiste con crecimientos. Afortunadamente la ayuda humanitaria llegó y fue clave para dar asistencia y buscar una reconstrucción a nivel nacional cientos de millones de dólares de USAID y planes de la ONU fueron los que se destinaron para apoyar a la nación africana, todo con la misión de restablecer seguridad, servicios públicos y cohesión social en zonas afectadas, complementando planes gubernamentales como el de Reconstrucción de Cabo Delgado.

Estos casos regionales enseñan la cruda realidad del continente africano tras años de violencia, disputas por el control, guerras civiles y gobiernos débiles, no es cuestión de un problema de financiamiento sino de cientos de años de historia de desfortuna y malos procesos, todas estas experiencias históricas han llevado como resultado el África actual. Las experiencias históricas indican que los modelos más efectivos combinan: liderazgo local inclusivo, supervisión financiera transparente, participación comunitaria obligatoria, y una secuencia correcta entre seguridad, servicios básicos y desarrollo económico.

SITUACIÓN ACTUAL

En 2025, el panorama de violencia armada en África seguirá deteriorándose: el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido que el continente concentra alrededor del 40% de los conflictos armados del mundo, con más de 50 focos activos y un aumento cercano al 45% desde 2020. En términos humanitarios, la prolongación de la violencia se traduce en colapsos sanitarios, pobreza extrema, inseguridad alimentaria y desplazamientos masivos. A finales de 2023, África albergaba 35 millones de personas desplazadas internas (IDPs), casi la mitad del total mundial, según el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).



Ilustración 3: Jóvenes africanos soldados (Desperta Ferro, 2023).

Este contexto se agrava por una tensión estructural en la arquitectura de asistencia: muchos Estados afectados carecen de capacidad fiscal e institucional para responder, y la ayuda internacional enfrenta recortes y fatiga de donantes. Un estudio publicado en *The Lancet* (divulgado también por UCLA) proyecta que recortes severos y sostenidos en financiamiento de ayuda podrían asociarse con más de 14 millones de muertes adicionales para 2030, especialmente en niños menores de cinco años.

Un estudio publicado en *The Lancet* (divulgado también por UCLA) proyecta que recortes severos y sostenidos en financiamiento de ayuda podrían asociarse con más de 14 millones de muertes adicionales para 2030, especialmente en niños menores de cinco años.

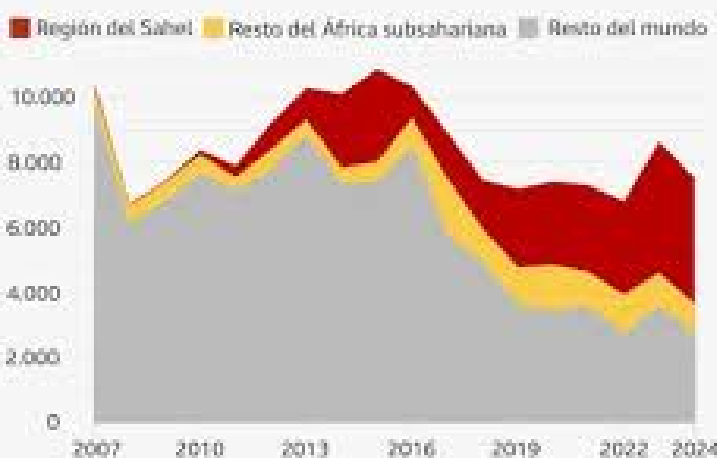
En Sudán, la guerra iniciada el 15 de abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) constituye una de las mayores crisis humanitarias actuales. A diciembre de 2025, el conflicto ha desplazado a casi 12 millones de personas y se mantiene como la mayor crisis de desplazamiento en curso. En paralelo, la inseguridad alimentaria se acerca a umbrales catastróficos: el análisis IPC reportó 24.6 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda y la detección/proyección de condiciones de hambruna en múltiples áreas. UNICEF advierte que en 2025 alrededor de 3.2 millones de niños menores de cinco años podrían sufrir malnutrición aguda (incluyendo una proporción en forma severa).

En la República Democrática del Congo (RDC), la intensificación del conflicto en el este y la proliferación de grupos armados sostienen una crisis humanitaria crónica: la prensa internacional reporta más de 7 millones de desplazados, en un entorno donde la economía de guerra y la disputa por territorios mineralizados sigue debilitando la reconstrucción institucional.

En la subregión del Sahel el panorama no luce muy positivo para sus habitantes, con un número de 2.1 millones de desplazados forzados en Burkina Faso debido a grupos armados yihadistas, las personas no ven un futuro muy brillante o razones para quedarse. Por otro lado en Malí, la insurgencias (JNIM, Estado Islámico) y tensiones postgolpe, tiene cerca de 850,000 desplazados internos campañas militares frecuentes en el norte/centro las personas no viven con tranquilidad de salir a la calle y los jóvenes no tienen una infancia inundado de juego y educación sino de violencia y masacres.

Muertes que el Índice de Terrorismo Global atribuye al terrorismo

La cifra en el Sahel superó a la de todo el resto del mundo en 2024



Fuente: Terrorism tracker / Cálculos del Instituto para la Economía y la Paz

Ilustración 4: Muertes que el índice de Terrorismo Global atribuye al terrorismo (La Nación, 2025).

Níger sufre atentados constantes (Delta Interior, BSR) que obligan a reubicaciones masivas. Los conflictos armados recientes han destruido infraestructura clave (escuelas, centros de salud), misma estructura que debería ser utilizada para que las personas tengan una vida plena, termina reducida a escombros por ideales extremistas y ansias de poder político y emocional, la inseguridad alimentaria tiene índices muy altos también, son niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores los cuales no saben al inicio del día si van a tener sus tres comidas diarias o siquiera una casa en condiciones. Las mujeres y niñas cargan con la peor parte: abusos sexuales en desplazamientos, bodas forzadas y abandono escolar creciente.

A día de hoy la ayuda humanitaria es necesaria debido al estado crítico en el que se encuentra esta zona. Esta ayuda ha venido de distintos sectores ACNUR (en refugios temporales), PMA/WFP (distribución de alimentos), OCHA (coordinación regional), ONG (MSF en clínicas móviles, Cruz Roja en primeros auxilios) y actores locales. En teoría se oye muy bien, lamentablemente en la práctica es muy complejo que esta ayuda llegue a todos los que lo necesitan: rutas cortadas por inseguridad y controles militares, burocracia en gobiernos de transición (Mali, Burkina, Níger), y epidemias de violencia contra cooperantes son una de las cuantas complicaciones que tienen que enfrentar estas organizaciones para poder dar el respectivo apoyo a los inocentes. El Plan de Respuesta Humanitaria de la Mano Común (HRP) para el Sahel en 2025 apunta a 21 millones de personas vulnerables (necesidades valoradas en unos US\$4.9 mil millones), aunque el financiamiento recibido apenas supera el 50%.

Se necesita del apoyo de todos los interesados posibles para asegurar que se cumplan los planes estratégicos que se tienen para asegurar la ayuda, solidaridad regional (G5 Sahel, UA), la cooperación bilateral (UE donante clave) y la estrategia "Niger Basin" del BM para la estabilización, son órganos claves que han apoyado para asegurar que las personas que necesitan ayuda la reciban.

En Somalia hay una crisis compleja que combina seguridad nacional con disputas bélicas entre: el grupo Al-Shabaab y luchas interclan locales y se junta con una sequía extrema acompañada de enfermedades. En el año 2025 se calcula que unos 5.98 millones de somalíes necesitarán ayuda humanitaria. Respecto a la cosecha no ha mejorado en comparación a años anteriores, en el año 2024 falló, dejando más de 4.4 millones de personas en fase de crisis alimentaria (IPC 3+) y elevando a 1.6 millones el número de niños con desnutrición aguda. Todo esto junto a imposiciones militares por parte del grupo al margen de la ley Al-Shabaab complica aún más la situación, ya que este tiene ciertas rutas prohibidas y se toman el privilegio de bloquear y desbloquear las rutas, estos se imponen mediante: (banderas en carreteras, amenaza a voluntarios, lo cual es contraproducente y ha generado bloqueos equivalentes a "hambruna de facto" en zonas rurales. Las ONG (UNICEF, ACNUR, WFP, Médicos del Mundo, etc.) operan con cobertura limitada y riesgo constante: se reportan ataques a convoyes humanitarios y usurpación de almacenes por los insurgentes. En la región de Puntland y Somaliland persisten brotes de cólera, sumándose a la crisis.

A día de hoy la atención está centrada en mitigación de hambrunas y protección. WFP y ACNUR distribuyen alimentos y refugios a desplazados internos a un total de más de 2.000.000 personas, mientras MSF dirige La atención 2025 se enfoca en mitigación de hambrunas y protección. WFP y ACNUR distribuyen alimentos y refugios a desplazados internos (más de 2 millones de desplazados internos, según estimaciones recientes), mientras MSF dirige campañas de vacunación y tratamiento nutricional. Lamentablemente muchos de estos esfuerzos no son suficientes, sólo el 21% del Plan de Respuesta Humanitaria somalí 2025 está financiado, lo que produce brechas críticas en agua, saneamiento y servicios de salud. El gobierno busca diálogos pacíficos y soluciones que ayuden a la comunidad en general, estos han acordado iniciativas de "estabilización": reparto de cargos, diálogos con facciones al-Shabaab moderadas, y planes pilotos de desarrollo rural posconflicto. A nivel local, se han fortalecido mecanismos tradicionales de solución de disputas con seguridad garantizada por tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) hasta finales de 2025. Estadísticamente, la situación es crítica: más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, la tasa neta de matrícula cayó de 42% (2019) a menos del 30% en 2025, y el acceso a servicios básicos de salud apenas alcanza al 40% de los somalíes desplazados.

En el norte de Mozambique especialmente la provincia de Cabo Delgado, sufre una insurgencia islamista activa desde 2017. A mediados de 2024 la unicef registró 577,000 desplazados internos por el conflicto en Cabo Delgado, cifra que en el año de 2025 ha subido al mismo tiempo que los ataques la comunidad con un total de 200.000 personas que debieron huir de sus hogares debido a combates. Escuelas se queman, se destruyen hospitales, campesinos se desplazan de la tierra. Las organizaciones humanitarias (ONU, Cruz Roja, MSF, organizaciones locales) mantienen operaciones de emergencia: distribución de alimentos (WFP), tratamientos de desnutrición infantil (UNICEF) y atención en salud mental y sexual (UNFPA).

Por suerte en el año 2025 solicitó cerca de 352 millones para asistir a 1.3 millones de afectados, este financiamiento puede sonar a mucho dinero pero solo cubre el 40% de las necesidades totales. El Banco Mundial y la Unión Africana han sido claves y han buscado hacer planes de reconstrucción, como: Plan para la Reconstrucción de la Provincia de Cabo Delgado” del Ejecutivo, junto con una estrategia policial enfocada en los IDPs.

Etiopía no se salva del desastre y tiene que enfrentar una crisis humanitaria vinculada a conflictos múltiples. La región del Tigray es el protagonista, la falta de alto al fuego después de la guerra 2020-22 solo sube las tensiones nacionales, lo cual ha generado el desplazamiento de 600,000–700,000 tigrineos desplazados (principalmente de Tigray Occidental). Estas cifras se suman a los 1.4 millones que ya estaban desplazados tras la guerra, lo que eleva a casi 2 millones de personas desplazadas en Tigray. A mediados de 2025 cerca de 5 millones de personas en Tigray dependen de ayuda alimentaria exterior, un número que podría crecer rápidamente si los bloqueos y combates interrumpen los convoyes humanitarios.

El bloqueo parcial de carreteras impuesto por el gobierno federal etíope, a través de amenazas de embargo, ha limitado gravemente las operaciones de organizaciones humanitarias como ACNUR, WFP, MSF y Cruz Roja, con denuncias recurrentes de restricciones burocráticas y demoras en permisos para entregar ayuda esencial. Fuera de Tigray, la sequía extrema en las regiones de Oromía y Somali, exacerbada por conflictos locales como los enfrentamientos entre Oromía y Somali y fracturas internas en Amhara, ha desplazado a más de 3 millones de personas adicionales en el país, mientras que WFP reporta que más de 10 millones de etíopes sufren hambre severa y hay 4.4 millones de mujeres y niños malnutridos que requieren tratamiento urgente, según datos de wfp.org; hasta abril de 2025, WFP ha asistido a aproximadamente 3.2 millones de personas con alimentos y nutrición, pero enfrenta un déficit presupuestario crítico de unos US\$ 222 millones para cubrir el semestre de abril a septiembre de 2025, lo que pone en riesgo la asistencia a 3.6 millones de etíopes vulnerables, incluyendo 740,000 niños y madres embarazadas que ya habían sido atendidos previamente.

Por otro lado, el gobierno etíope ha intentado impulsar políticas de reconstrucción con el anuncio de un "Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo" enfocado en infraestructuras y empleo, además de promover un bono de la diáspora para financiar proyectos en Tigray y Oromía, mientras que el Banco Mundial y el FMI han extendido líneas de crédito condicionadas a reformas macroeconómicas, y la Unión Africana junto con la ONU apoyan programas piloto de rehabilitación rural posconflicto, como la restauración de pozos y centros de salud en Tigray. A nivel legislativo, se han promulgado leyes de seguridad nacional más estrictas y un régimen de emergencia en zonas del norte, medidas que han sido criticadas por ONG de derechos humanos por restringir la libertad de prensa y, en general, la gobernabilidad sigue siendo débil con una resurgente centralización, ya que líderes regionales de Amhara y Oromía cuestionan abiertamente la autoridad federal, dificultando la coordinación de ayuda humanitaria; indicadores socioeconómicos revelan una brecha alarmante, con una inflación interanual superior al 25%, un desempleo juvenil cercano al 30% y alrededor del 5% de la población, principalmente en Tigray, viviendo bajo riesgo de hambruna confirmada, aunque algunos informes sugieren que la sequía podría aliviarse con lluvias inesperadas en ciertas áreas, pero eso no cambia el hecho de que los conflictos internos persisten sin resolución clara.

El panorama descrito dibuja una África donde la violencia armada y la crisis humanitaria se retroalimentan y se vuelven rutina. Con el 40% de los conflictos del mundo y 50 focos activos, la guerra deja de ser un "episodio" y pasa a ser una condición estructural: colapsa sistemas de salud, destruye escuelas, erosiona ingresos, profundiza la pobreza y empuja a millones al desplazamiento. Que a finales de 2023 hubiera 35 millones de desplazados internos, casi la mitad del total mundial, es una señal de alarma.

Los casos nacionales confirman un mismo patrón con distintos nombres. En Sudán, la guerra entre SAF y RSF convierte el desplazamiento masivo y el hambre en paisaje permanente, con cifras cercanas a 12 millones de personas desplazadas y millones en inseguridad alimentaria aguda. En la RDC, la violencia del este y la disputa por territorios mineralizados sostienen una emergencia crónica. En el Sahel, la combinación de insurgencias, golpes y represión fractura comunidades, corta rutas, destruye infraestructura básica y expone a mujeres y niñas a abusos.

Somalia y Cabo Delgado añaden una capa letal: sequías, enfermedades y control territorial que bloquea rutas y convierte la asistencia en un objetivo, generando "hambrunas de facto". Etiopía evidencia cómo bloqueos, burocracia y fragmentación política pueden sabotear operaciones a gran escala. En conjunto, la ecuación se repite: inseguridad + obstáculos de acceso + fatiga de donantes = más muertes evitables, especialmente infantiles.

De cara a 2025–2030, la pregunta incómoda no es si habrá más emergencias, sino cuántas se aceptarán como “inevitables”. Evitarlo exige pasar de administrar la catástrofe a reducir riesgos: protección efectiva de civiles y cooperantes, corredores humanitarios verificables, financiamiento predecible, y políticas que unan estabilización con servicios básicos, justicia local y empleo juvenil. Sin ese giro, los planes seguirán siendo promesas y el costo humano seguirá creciendo.

PUNTOS CLAVE DEL DEBATE

- La reconstrucción en África no empieza cuando termina la guerra, porque en muchos países la guerra nunca termina del todo. Se reconstruye mientras la gente sigue huyendo y muriendo.
- El problema no es solo la falta de dinero, sino quién lo controla. Cuando el financiamiento cae en manos equivocadas, la reconstrucción puede alimentar el mismo conflicto que intenta resolver.
- En muchos países la ayuda humanitaria no llega porque las rutas están bloqueadas o se usa como herramienta política. Sin acceso seguro, no hay reconstrucción posible.
- Los donantes están cansados y los fondos no alcanzan. Esto obliga a pensar en nuevas formas de financiamiento y no depender siempre de la misma ayuda externa.
- No se puede hablar de desarrollo sin seguridad mínima, ni de paz sin salud, educación y trabajo. Saltarse pasos solo crea Estados frágiles.
- Las comunidades afectadas casi nunca son escuchadas, y cuando se las excluye, la reconstrucción fracasa. La gente local tiene que ser parte del proceso.
- La corrupción y la falta de control hacen que el dinero desaparezca. Sin transparencia real, la reconstrucción se queda en promesas.
- Reconstruir no es solo levantar edificios, es devolver dignidad, confianza y un futuro a personas que llevan años viviendo en guerra.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Ha estado o está su delegación involucrada en algún conflicto armado en África?
2. ¿Qué papel desempeñan actualmente en su delegación los grupos armados no estatales, como milicias insurgencias y clanes?
3. ¿Cómo ha afectado la violencia prolongada en su delegación el acceso a educación, salud, y la de los derechos humanos?
4. ¿A través de qué mecanismos ha participado su delegación en la asistencia internacional, como ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, préstamos financieros o misiones internacionales de seguridad?
5. ¿Cuántos recursos destina su delegación a la reconstrucción en países africanos afectados por la violencia?
6. ¿Qué resultados, tanto negativos como positivos, ha tenido la intervención de su delegación en los procesos de reconstrucción en África?
7. ¿Cómo podría su delegación contribuir a una reconstrucción más justa y sostenible?

REFERENCIAS

Ilustración 1: La Conferencia de Berlín . (s.f.). [Imagen Online]. En Portal Académico CCH. <https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal2/unidad1/expansioncolonialsigloXIX/coferenciadeberlin>

Ilustración 2: Paredes, N. (2023). Golpes de Estado en África [Imagen Online]. En BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/articles/ce7wzl37p7no>

Ilustración 3: Pinto, F. (2023). Ante una potencial guerra en África, soldados nigerinos entrenan en Diffa, Níger. [Imagen Online]. En Desperta Ferro. <https://www.despertaferro-ediciones.com/2023/guerra-en-africa-tras-el-golpe-de-estado-nigerino/>

Ilustración 4: Muertes que el índice de Terrorismo Global atribuye al terrorismo. (2025). [Imagen Online]. En La Nación. <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-sahel-como-es-la-region-con-mas-muertes-por-terrorismo-en-todo-del-mundo-nid20032025/>

ACLED. (8 diciembre, 2025). Africa overview: December 2025 [Conflict analysis report]. <https://acleddata.com/analysis/africa/africa-overview-december-2025/>

African Development Bank Group. (2024). African economic outlook 2024: Mobilizing private sector financing for climate and green growth in Africa. <https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2024>

African Union Commission. (2006). Post-conflict reconstruction and development (PCRD) policy framework. <https://www.peaceau.org/uploads/pcrd-policy-framework-eng.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (4 noviembre, 2025). Famine conditions confirmed in Sudan's El Fasher and Kadugli as hunger and malnutrition ease where conflict subsides. <https://www.fao.org/newsroom/detail/famine-conditions-confirmed-in-sudan-fasher-and-kadugli/en>

Integrated Food Security Phase Classification. (2025). Sudan: Acute food insecurity analysis (September 2025–May 2026) [IPC Technical Report]. https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_Acute_Food_Insecurity_Sep2025_May2026.pdf

Internal Displacement Monitoring Centre. (2024). Global report on internal displacement 2024. <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2024/>

International Committee of the Red Cross. (2025). Principled humanitarian action under pressure [Policy brief].

<https://www.icrc.org/en/document/principled-humanitarian-action-under-pressure>

International Organization for Migration. (2025). PROGRESS 2025: Global report on solutions to internal displacement.

<https://dtm.iom.int/reports/progress-2025>

United Nations Children's Fund. (2025). Children affected by conflict and displacement in the Sahel [Situation report].

<https://www.unicef.org/reports/children-affected-conflict-sahel-2025>

United Nations Development Programme. (2022). Renewed governance and peacebuilding framework for Africa (2022–2025).

<https://www.undp.org/africa/publications/renewed-governance-and-peacebuilding-framework-africa-2022-2025>

United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). Global trends: Forced displacement in 2024.

<https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024>

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). Global humanitarian overview 2025. <https://www.unocha.org/publications/report/global/global-humanitarian-overview-2025>

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Sudan: Humanitarian needs and response plan 2025.

<https://www.unocha.org/publications/report/sudan/sudan-humanitarian-needs-and-response-plan-2025>

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Sahel humanitarian needs and requirements overview 2025. <https://www.unocha.org/publications/report/burkina-faso/sahel-humanitarian-needs-and-requirements-overview-2025>

World Bank Group. (2020). *World Bank Group strategy for fragility, conflict, and violence 2020–2025*.

<https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/world-bank-group-strategy-for-fragility-conflict-and-violence-2020-2025>

World Food Programme. (2025). *WFP warns of rising hunger and malnutrition in Ethiopia as humanitarian needs outpace resources*. <https://www.wfp.org/news/wfp-warns-rising-hunger-and-malnutrition-ethiopia>

RECOMENDACIONES FINALES

Como Mesa Directiva de este comité, consideramos oportuno dar algunas recomendaciones finales para poder tener un buen desarrollo del debate:

PORTAFOLIO COMPLETO Y DE CALIDAD

El portafolio es una herramienta esencial para el desarrollo del debate en GLCMUN. Debe estar bien estructurado, con información clara, argumentos sólidos y fuentes confiables que respalden la posición oficial de la delegación.

INTERVENCIONES BIEN ARGUMENTADAS

Se recomienda planear previamente algunas intervenciones y apoyarlas con datos concretos, estadísticas o recursos visuales si es pertinente. Cada intervención debe defender la postura del país con respeto y diplomacia, evitando ataques directos y manteniendo siempre un tono adecuado.

REALISMO EN EL DEBATE

GLCMUN es una simulación de la dinámica internacional real. Las alianzas, bloques y propuestas deben ser coherentes con el contexto político, económico y social de cada país para garantizar consistencia y credibilidad en el comité.

PROHIBIDO EL PLAGIO

Todas las fuentes utilizadas deben citarse en formato APA. El plagio está estrictamente prohibido y cualquier información presentada deberá estar debidamente sustentada si es solicitada por la Mesa.

USO ADECUADO DEL LENGUAJE PARLAMENTARIO

Es fundamental emplear correctamente las mociones y el lenguaje parlamentario establecido en el reglamento oficial de GLCMUN, manteniendo siempre la diplomacia y el orden dentro del debate.

PARTICIPA CON CONFIANZA

La seguridad y la preparación marcan la diferencia. Intervén activamente, demuestra dominio del tema y respalda tus argumentos con información previamente investigada.